

MINUTA DISCURSO PRESIDENCIAL DEL 11 DE MARZO DE 1992

I. ASPECTOS MACROECONOMICOS

Hace dos años, formulamos ante la ciudadanía el compromiso de reducir sustancialmente la inflación. Cumplir con este compromiso requirió políticas de austeridad en el gasto, las que impulsamos en conjunto con el Banco Central. Se requirió también un esfuerzo permanente del Estado para manejar responsable y eficientemente los desembolsos del Fisco, de modo de obtener tasas de ahorro fiscal compatibles con una moderación en los precios.

El esfuerzo anti-inflacionario ha tenido éxito. Hemos pasado de una tasa de inflación de 27 por ciento en 1990 --ya inferior a la que habíamos heredado del gobierno anterior-- a poco más de 18 por ciento en 1991. Es decir, logramos una reducción de un tercio en un año, al mismo tiempo que se aceleraba el crecimiento económico y la creación de empleos. La expansión de la producción de 5.7 por ciento registrada en 1991, así como la baja del desempleo a niveles del orden de 5 por ciento, atestiguan el notable dinamismo de la economía chilena.

Ante tan promisorios resultados, podría existir la tentación de dormirse sobre estos laureles, aceptando permanentemente una tasa de inflación como la que hemos experimentado recientemente. Ello constituiría un error de proporciones. El estadista norteamericano Tomás Jefferson sostenía que el precio de la democracia es la eterna vigilancia. Lo mismo puede decirse de la lucha contra la inflación.

No vamos sólo a mantener, sino a redoblar nuestros esfuerzos para asegurar la estabilidad de los precios. Chile puede y debe alcanzar tasas de inflación de un dígito en el mediano plazo.

Deseo convocar hoy al país a emprender un esfuerzo compartido para obtener una baja importante y sostenida en el nivel de inflación. Un logro de ese tipo representaría una contribución fundamental a la mantención del poder de compra de las remuneraciones, una excelente señal de estabilidad para los inversionistas y un nuevo elemento de prestigio internacional para la economía chilena.

Para ello será necesario el esfuerzo de todos. El gobierno hará su contribución en el plano que le corresponde --no sólo insistiendo en una muy necesaria austeridad en los gastos públicos y manteniendo los altos niveles de ahorro fiscal que hemos alcanzado, sino también buscando mayor eficiencia y agilidad en la gestión pública. Lograremos ésto sin abandonar el fuerte énfasis social que le hemos imprimido al gasto del Estado. Pero no cederemos jamás a la tentación populista, que significa pan para hoy y hambre para mañana.

Alcanzar una menor inflación involucra también, de manera muy fundamental, a empresarios y trabajadores. Debemos continuar resistiendo la tentación de politizar el debate económico, evitando al mismo tiempo fluctuaciones bruscas e injustificadas en las expectativas.

Debemos también insistir en una muy necesaria cuota de responsabilidad en las demandas salariales, perfeccionando asimismo los criterios para reajustar sueldos y salarios. Diversos sectores deben abrirse, como ya se ha comprometido el año pasado a hacerlo la CUT, a iniciar negociaciones sobre la base de la inflación esperada. Esta flexibilización de los mecanismos de reajustabilidad es condición fundamental para alcanzar una menor tasa inflacionaria.

II. ASPECTOS SOCIALES

Uno de los aspectos que más nos llenan de orgullo son los avances logrados en el terreno social.

Hace dos años asumimos la tremenda responsabilidad de responder a las aspiraciones de millones de chilenos sumidos en la pobreza. Adquirimos el compromiso de revertir las prioridades en la asignación de los recursos públicos en favor de quienes más lo necesitaban y elaborar iniciativas innovadoras que le permitieran a los más pobres superar permanentemente su condición de marginados.

Muchos miraron estos compromisos con escepticismo. Algunos creyeron que el Gobierno sería desbordado por las demandas sociales; otros, que el intento por cumplir con el programa social desestabilizaría las finanzas públicas. Nada de ello ha ocurrido. En dos años el Gobierno ha aumentado en más de un 30% el presupuesto de los sectores sociales, destinando para este efecto 1.300 millones de dólares adicionales que han permitido alcanzar los más altos niveles de gasto público social registrados.

En estos dos años hemos avanzado en todas las áreas de la política social. Se ha revertido la negativa tendencia de los presupuestos asignados a las prestaciones sociales básicas de seguridad social, educación, salud y vivienda. Se ha invertido en programas de mejoramiento de la calidad de los servicios sociales para asegurar un rendimiento adecuado de los recursos. Se ha innovado para focalizar mejor los recursos públicos en los más pobres. Se han desarrollado programas en favor de sectores largamente postergados de la población, como las mujeres y los jóvenes.

Los avances logrados en el desarrollo social y la lucha contra la pobreza extrema, lejos de afectar la estabilidad macroeconómica, ha ido acompañado de niveles

45.5000
millones
de pesos

crecientes de ahorro público. Ello ha sido posible porque desde un comienzo señalamos al país que no se podría avanzar responsablemente en el terreno social sin una reforma tributaria que permitiera financiar este esfuerzo. Los chilenos estuvieron dispuestos a aceptar este desafío.

Por primera vez en muchos años, los avances logrados en el terreno social, lejos de compensar los efectos de la política económica han sido compatibles con ésta. En efecto, en los últimos dos años se han creado cerca de 120 mil plazas de trabajo, se han incrementado las remuneraciones reales en un 8% real y los ingresos fiscales han crecido en más de un 15% real, destinándose íntegramente a financiar la inversión social y en infraestructura.

Es así como Chile está hoy logrando lo que para muchos países es una profunda aspiración: compatibilizar el crecimiento económico, el progreso social y la democratización política. Vemos con orgullo como nuestro país ha ido adquiriendo un reconocimiento y liderazgo internacionalmente reconocido en estas áreas.

La solidez de los avances logrados en los últimos dos años nos permiten asegurar que el Gobierno podrá cumplir con los compromisos adquiridos en el terreno social dentro de su mandato. En este periodo habremos reequipado a los hospitales y recuperado la salud primaria; habremos llevado a cabo las acciones necesarias para elevar la calidad de la educación y mejorado las oportunidades educacionales de los niños de menores recursos; habremos reducido el déficit habitacional; habremos pagado gran parte de la deuda del país con los trabajadores, los jubilados y los profesores; habremos generado oportunidades de inserción laboral para miles de jóvenes; habremos integrado a miles de campesinos y pequeños empresarios a la senda del desarrollo.

Estamos conscientes, sin embargo, que para lograr estos objetivos es mucho aún lo que falta por hacer. Se depositan en nosotros las esperanzas de millones de chilenos que durante largos años sólo experimentaron postergaciones y marginación. Debe persistirse en el esfuerzo social y asegurar un uso eficaz de los recursos, combatiendo la ineficiencia y la burocracia. Debe desarrollarse a plenitud los programas de inversión social, cuyos resultados sólo se manifiestan en el mediano plazo. Deben mantenerse las prioridades en la asignación de los recursos, resistiendo las presiones y las demandas de grupos poderosos.

Sólo entonces podremos mirar con satisfacción a este período, aunque sólo lo estrictamente necesario para preguntarnos por nuevas tareas y desafíos. Chile es un país pobre, con muchas metas y avances por conseguir. Tenemos la gente, las ideas, la economía y la voluntad para avanzar por la senda del desarrollo. Ni este Gobierno, ni los que le sigan pueden permitirse desperdiciar esta oportunidad.